

El dedo en la llaga

La reforma de las Facultades de Comunicación tiene tres componentes esenciales:

Primero, la reorganización conceptual y curricular para actualizar las carreras en respuesta a los cambios ocurridos en los medios, los códigos, la sociedad y las tecnologías. Sobre esto escriben en esta edición colaboradores íntimamente ligados a la evolución de la enseñanza y la investigación en América y Europa. La profundidad de sus diagnósticos y sus propuestas confirman que hay conciencia de los problemas y las soluciones que pueden intentarse.

Segundo, la reforma no puede separarse de la situación de la universidad en su conjunto que enfrenta problemas de gestión, administración y política académica y donde se tiende a resistir las reformas como en cualquier organización compleja. Se juegan cuotas de poder, intereses personales y privilegios burocráticos. Curiosamente, ninguno de nuestros colaboradores centró sus comentarios en estos temas. Las buenas ideas no son suficientes. Requerimos planes de acción reorganizativa que sean política y administrativamente viables.

Tercero, no se puede reformar las facultades sin tomar en cuenta su situación económica ahogada por multitudes de estudiantes, inflación, estrechez presupuestaria, y ausencia de nuevas fuentes de financiamiento. Las propuestas quedarán en el hiperespacio platónico si no afrontan cuestiones financieras comunes a todas las instituciones públicas de América Latina:

La sobrepoblación estudiantil diluye la calidad del estudiantado e impide ofrecer una formación profesional adecuada. Medio siglo de experiencias con el ingreso irrestricto y no calificado demuestran que el sistema no puede garantizar el acceso universal y la calidad de formación que estudiantes, docentes, empleadores y la sociedad requieren. La restricción del ingreso por filtros de examen de competencia y el establecimiento de cupos máximos ya ha sido debatida hasta el cansancio. La voluntad de reforma exige una respuesta a este problema.

Desde hace años el Estado está en permanente crisis fiscal y la inflación reduce los presupuestos reales de la universidad. No debemos aceptar que el Estado incumpla con sus responsabilidades hacia la educación pero, por ahora, no se puede contar con un financiamiento estatal adecuado a las necesidades de los centros de estudios. Las universidades necesitan nuevas fuentes de ingresos que amplíen su autonomía en

relación al fisco. El grado de subsidio implícito en los actuales costos de matriculación es insostenible. En toda América Latina estudiantes de las más diversas carreras y estratos sociales acuden a las nuevas instituciones privadas dispuestos a pagar incluso cuotas excesivas para recibir una educación que consideran inalcanzable en las universidades públicas. Se necesitan mecanismos que garanticen mayores ingresos al presupuesto universitario y, al mismo tiempo, becas y préstamos que asistan al estudiante de menores recursos.

Algunos de nuestros colaboradores plantean correctamente, aunque con mucho atraso, la necesidad de superar el abismo que separa a las universidades de las empresas y eventuales empleadores de sus graduados. Lo hacen tímidamente, casi disculpándose por una traición indefinida. Es como si sus propuestas arriesgasen una siniestra contaminación. Relacionarse con el sector privado y empresarial -nacional y transnacional- es hoy una exigencia ineludible de la modernización y de la reforma misma. Sólo queda por discutir cómo hacerlo. Y como dice José Marques de Melo, la universidad debe tomar la iniciativa y no esperar que vengan a golpearle la puerta. Los empresarios también deben repensar los beneficios que pueden derivar de estas relaciones, suspender criterios cortoplacistas y asumir sus responsabilidades hacia la educación. Lo han hecho en todo el mundo industrializado y tendrán que hacerlo en América Latina.

El deterioro de la última década hace que las universidades y las facultades de comunicación requieran arreglos de infraestructura y nuevos equipos indispensables para la enseñanza. La magnitud de estas inversiones (en el marco de la desatención fiscal) requiere la intervención de las instituciones financieras con créditos blandos. Las universidades de Europa, Canadá y Estados Unidos y los organismos financieros internacionales están dispuestos a asumir su función en la reconstrucción. Pero sólo lo harán en el marco de una reorganización bastante radical de las instituciones.

La discusión queda incompleta si no toca a fondo estos temas que son conflictivos y riesgosos políticamente, y víctimas fáciles del discurso demagógico. Pero no pueden eludirse. Llamamos a nuestros lectores a suplementar y sustentar las reflexiones conceptuales que con mucha satisfacción presentamos en esta edición especial de *Chasqui*.



Gino Lofredo
Editor